



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 10/12/2020

Radicado	08-001-33-33-014-2020-00168-00
Medio de control o Acción	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Marqueza Lucila Potes Martínez
Demandado	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME

A su despacho el expediente de la referencia, informándole que nos correspondió por reparto. Sírvese proveer.

PASA AL DESPACHO

Para decidir sobre la eventual admisión de la demanda.

CONSTANCIA

Demanda radicada y ubicada en el link:
<file:///C:/Users/Admin/Downloads/DEMANDA%20LABORAL%20ADMINISTRATIVA%20LUCILA%20POTES.pdf>

ALBERTO OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Radicado	08-001-33-33-014-2020-00168-00
Medio de control o Acción	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Marqueza Lucila Potes Martínez
Demandado	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Marqueza Lucila Potes Martínez, actuando a través de apoderado judicial, presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, en la que solicita la nulidad de las Resoluciones RDP 007465 del 24 de marzo de 2020, RDP 011048 del 06 de mayo de 2020 y RDP 011269 del 08 de mayo de 2020, y como restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada al reconocimiento y pago de una sustitución de la pensión que en vida disfrutó el señor Robinson Zuñiga Pabón (q.e.p.d.), a partir de la fecha de su fallecimiento.

Estando la presente demanda al Despacho para decidir sobre su eventual admisión, esta Agencia Judicial, declarará la falta de competencia por jurisdicción para conocer del presente asunto, por las razones que pasan a exponerse.

De conformidad con el artículo 104 del C.P.A.C.A. -*cláusula especial de competencia*- la jurisdicción contenciosa está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, que sean sujetos al derecho administrativo, en donde resulten involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan funciones administrativas.

Además, dicha disposición normativa efectúa una enunciación frente a los asuntos que esta jurisdicción conocerá, entre éstos, aquellos derivados de la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público (numeral 4°).

Por su parte, la misma codificación preceptúa qué asuntos **no** conoce esta jurisdicción, y para el caso que nos ocupa, es menester referirnos a aquella consagrada en el numeral 4° del artículo 105, que dispone los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.

En síntesis, y en lo que respecta a los asuntos de índole laboral, le es atribuida a esta jurisdicción, el conocimiento de los procesos de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, es decir, cuando el demandante tenga vinculación laboral con una entidad pública y dicha vinculación sea de naturaleza legal y reglamentaria.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Mientras que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, regula las relaciones laborales provenientes de un contrato de trabajo, como lo estatuye la normatividad que rige dicha jurisdicción, especialmente los artículos 3 y 5 del Código Sustantivo del Trabajo y 2 del Código Procesal Laboral, los cuales asignan la competencia a la jurisdicción ordinaria para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en un contrato de trabajo, indistintamente de la calidad de entidad pública o privada del empleador.

En referencia el artículo 3º del CST, señala:

“ARTICULO 3o. RELACIONES QUE REGULA. El presente Código regula las relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares.”

Asimismo, el numeral 4º del artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral –Decreto 2158 de 1948-, en materia de seguridad social contempla:

“Artículo 2º. Competencia general. La Jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laborales y de seguridad social conoce de: (...) 4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.” Se resalta.

Con base en las normas expuestas se puede concluir inequívocamente que la jurisdicción de lo contencioso administrativo en asuntos relativos a la seguridad social conocerá de los litigios que se susciten entre los servidores públicos y la entidad pública que administre dicho régimen, es decir, que en materia pensional sólo admite controversias frente al régimen de prima media con prestación definida y los regímenes de excepción que se instituyó en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, excluyéndose por consecuencia, el otro régimen que es administrado por entidades de derecho privado, esto es, el de ahorro individual en sus diferentes modalidades.

Por su parte, la justicia ordinaria laboral en el mismo asunto conocerá de aquellos pleitos que se presenten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras de los servicios, entendiéndose que éstos versan es con relación a los trabajadores del sector privado y de los trabajadores oficiales.

Al respecto, vale la pena resaltar que en el ordenamiento jurídico colombiano y el régimen legal de los servidores públicos contempla la clasificación y la diferencia respectiva entre empleado público la cual su vinculación es legal y reglamentaria, los trabajadores oficiales quienes se vinculan a través de contrato individual de trabajo (relación laboral) y los contratistas de prestación de servicios vinculados a través de contrato estatal. En este sentido, como se mencionó en precedencia y conforme a la doctrina nacional, el Trabajador Oficial quién se vincula con la administración a través de contrato individual de trabajo (relación laboral), por regla general son trabajadores oficiales quienes laboran en las empresas industriales y comerciales del Estado, del nivel nacional y territorial, y en las sociedades de economía mixta con predominio del capital oficial que la jurisprudencia ha definido como superior al 90%.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Por excepción, son trabajadores oficiales, quienes laboran en la construcción y sostenimiento de obras públicas en la administración central y en los establecimientos públicos, tanto nacional como territorial. De igual manera, se predica que los empleos del trabajador oficial son los señalados en la ley para ser desempeñados por personas naturales, vinculadas mediante una relación de tipo contractual, regulado por disposiciones especiales. El Trabajador Oficial desempeña entonces un empleo público que debe encontrarse incorporado en las respectivas plantas de personal.

Del caso particular:

En este orden de ideas, procedió el despacho a establecer la calidad con la que comparece la parte accionante, es decir que la razón de su causa petendi tiene como base el reconocimiento pensional efectuado al señor ROBINSON ZUÑIGA PABÓN (q.e.p.d.) como trabajador oficial de la extinta Empresa Puertos de Colombia, para la época de su retiro como estibador a través de un contrato de trabajo, y la accionante, afirmando ser su compañera permanente.

Ahora bien, entrando a estudiar la naturaleza jurídica de la Empresa Puertos de Colombia, a la cual el señor Zuñiga Pabón, prestó sus servicios, estuvo constituida como Empresa Industrial y Comercial del Estado, y atendiendo la naturaleza del cargo de *estibador* que ocupaba el causante, se tiene que la relación laboral estaba soportada a través de un contrato de trabajo y los conflictos derivados de dicha relación están regidos a través de la legislación laboral colombiana y a su vez deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

Encontramos que con base en los Decretos Leyes 1050 y 3130 de 1968, dictados en desarrollo de facultades extraordinarias concedidas por la Ley 65 de 1967, se dictó el Decreto Ley 561 de 1975, por el cual se organiza la empresa Puertos de Colombia como empresa comercial del estado, en relación con su objeto comercial no hubo modificaciones sustanciales. Conforme a lo señalado, el régimen aplicable al personal de la empresa, se rige por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, atendiendo la naturaleza jurídica de Puertos de Colombia.

En su momento el decreto 2465 de 1981 “Por el cual se aprueban los estatutos de la Empresa Puertos de Colombia”, en el Capítulo V “Del Personal”, su artículo 38, señalaba:

“Artículo 38. Las personas que presten sus servicios a Puertos de Colombia son trabajadores oficiales, a excepción de los Subgerentes, los Jefes de oficina, el Secretario General y el Asistente de la Gerencia General de la Oficina principal, así como los Gerentes de los terminales, quienes son empleados públicos.”

Como se puede observar en el texto de la demanda, se pretende la sustitución pensional por el fallecimiento del señor Robinson Zuñiga Pabón, ocurrido el 30 de enero de 2020, quien era pensionado de la Liquidada Empresa Puertos de Colombia, a quien se le reconoció pensión de jubilación mediante la Resolución 129017 del 23 de enero de 1980. Si bien es cierto el petitum de la demanda se basa en solicitar la nulidad de los actos administrativos No. RDP 007465 del 24 de marzo de 2020, RDP 011048 del 06 de mayo de 2020 y RDP 011269 del 08 de mayo de 2020, mediante los cuales se niega la pensión de sobreviviente a la demandante Marqueza Potes Martínez, es claro que esta es una pretensión que hace parte del Sistema de Seguridad Social Integral, por lo que es competencia exclusiva de la justicia ordinaria laboral, de conformidad con lo contemplado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

en el artículo 11 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por la Ley 712 de 2001, artículo 8.

Así las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa y el cargo que desempeñó el señor Robinson Zuñiga Pabón, y de conformidad con lo expuesto en precedencia, este Despacho no avocará el conocimiento de la demanda de la referencia ante la falta de competencia por jurisdicción, y de conformidad con lo establecido en el artículo 168 de la Ley 1437 de 2011, se ordenará que por Secretaría se envíe el expediente a la Oficina Judicial de Barranquilla para que sea repartido entre los Juzgados Laborales del Circuito.

En este orden, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla,

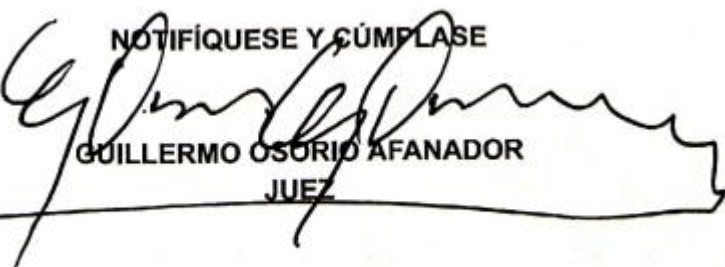
RESUELVE:

PRIMERO: NO AVOCAR el conocimiento de la demanda presentada por la señora Marqueza Lucila Potes Martínez, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, por la falta de competencia por jurisdicción para tramitar el presente asunto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Considerar que la competencia para conocer del presente asunto la tiene el Juez Laboral del Circuito de Barranquilla.

TERCERO: Por Secretaría, **REMÍTASE** el expediente virtual a la oficina judicial de Barranquilla, para que se someta a reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito de ésta ciudad.

CUARTO: Notifíquese la presente providencia mediante estado electrónico, en atención a lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto 806 de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO

Nº 139 DE HOY 11/12/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA